



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Medellín, Siete (07) de marzo del año dos mil veintitrés (2023)

Auto interlocutorio N°0282
05001310501320220029200

Dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por **CAMILO ANDRÉS RENDÓN ÁLVAREZ** en contra del **MUNICIPIO DE MEDELLÍN -Hoy DISTRITO-** y de la **FUNDACIÓN PASCUAL BRAVO** con llamamiento en garantía de **CONFIANZA S.A.**, del ejercicio del control de legalidad obligatorio en cada etapa procesal, previsto en los artículos 48 del CPTYSS y 132 del CGP, se advierte la necesidad de declarar la falta de jurisdicción por los siguientes argumentos:

Se solicita en la demanda se declare la existencia de un vínculo de naturaleza laboral entre el señor CAMILO ANDRÉS RENDÓN ÁLVAREZ y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, por la teoría del contrato realidad ante la intermediación ilegal con la FUNDACIÓN PASCUAL BRAVO. Así mismo se declare la ilegalidad de su desvinculación por la falta de autorización del Ministerio del Trabajo, y en consecuencia ante la estabilidad laboral reforzada que reclama por su condición de salud, se ordene su reintegro en la plana de cargos del MUNICIPIO DE MEDELLÍN, sin solución de continuidad, con el pago indexado de salarios y prestaciones legales y extralegales reconocidas a los servidores del ente territorial, además de la sanción legal de 6 meses y la condena en costas.

Subsidiariamente, solicita las declaraciones y condenas sean en contra de la FUNDACIÓN PASCUAL BRAVO.

Deviene fundamental para el sustento de esta decisión, traer a colación importantes pronunciamientos de la H. Corte Constitucional en sede de resolución de conflictos de jurisdicción, en los cuales ha definido las siguientes subreglas relativas a cuál es el funcionario judicial competente cuando la pretensión principal del proceso sea la declaratoria de vinculación laboral con **alguna entidad estatal en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas**:

JUEZ COMPETENTE PARA RESOLVER PRETENSIONES DE VINCULACIÓN LABORAL POR CONTRATO REALIDAD CON UNA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO CUANDO SE SOLICITE ABUSO DE LA CONTRATACIÓN MEDIANTE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En el auto 492 de 2021 la H. Corte Constitucional aclaró que en este contexto el funcionario judicial competente es el Juez Administrativo porque el artículo 104 del CPACA además de atribuirle el conocimiento de las controversias relacionadas con los asuntos laborales "*relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado*", además que impone el conocimiento de litigios "*originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa*". Enfatizó que en el escenario en el cual se solicite la existencia de relación laboral por aplicación de la teoría de contrato realidad planteando relaciones encubiertas mediante contratos de prestación de servicios, **en todos los eventos** es el Juez Administrativo el llamado a conocer, porque solamente esta jurisdicción es la autorizada legalmente para la revisión de contratos de prestación de servicios de naturaleza estatal, al margen que el demandante cumpliera labores de empleado público o trabajador oficial.

*"(...) En los casos en los que se discute el reconocimiento de un vínculo laboral con el Estado no es posible aplicar la misma regla que se utiliza para definir la autoridad judicial que conoce de las controversias suscitadas entre los trabajadores oficiales o empleados públicos y el Estado. Lo anterior conlleva la necesidad de que la Sala Plena se aparte del precedente que, en su oportunidad, desarrolló la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Es claro que corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los procesos laborales en los que son parte trabajadores oficiales y a la jurisdicción contencioso administrativa aquellos relacionados con la vinculación legal y reglamentaria de los empleados públicos. En efecto, **cuando existe certeza de la existencia de un vínculo laboral** y no se discute que había una relación de subordinación entre la entidad pública y el trabajador o empleado, resulta válido definir la jurisdicción competente para conocer de estos asuntos con base en las funciones que dice haber ejercido el empleado o trabajador (criterio funcional) y la entidad a la cual se encontraba vinculado (criterio orgánico), para establecer si se trata de un trabajador oficial, que puede ejercitar la acción laboral ante la jurisdicción ordinaria del trabajo, o de un empleado público, caso en el cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la que debe definir el asunto.*

*Sin embargo, esta regla **no puede ser aplicada cuando el objeto de la controversia es, precisamente, el reconocimiento del vínculo laboral** y el pago de las acreencias derivadas de la aparente celebración indebida de contratos de prestación de servicios con el Estado pues, en estos casos, se trata de evaluar i) la actuación desplegada por entidades públicas en la suscripción de ii) contratos de naturaleza distinta a una vinculación laboral. Adicionalmente, la única autoridad judicial competente para validar si la labor contratada corresponde a una función que "no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados" es el juez contencioso.*

Examinar, aun preliminarmente, las funciones desempeñadas por los contratistas del Estado para definir la competencia, constituye un examen de fondo de la controversia. Adicionalmente, la Sala considera que determinar si las funciones desempeñadas por los contratistas del Estado a través de vínculos contractuales simulados correspondían a las de un trabajador oficial o a las de un empleado público implica realizar un examen de fondo del asunto. Esta labor no le corresponde al juez encargado de definir la jurisdicción competente, pues esto conduce a pronunciarse sobre la existencia de una relación laboral que es, justamente, lo que se pretende con la demanda y lo que debe demostrarse en el curso del proceso. En todo caso, este tipo de asuntos solo pueden ser decididos por el juez contencioso administrativo que es el facultado para evaluar las actuaciones de la Administración.

En este sentido, la evaluación preliminar de la calidad del demandante como trabajador oficial o empleado público supone que la jurisdicción competente para resolver el litigio se encuentra en debate durante toda la controversia. En efecto, si el factor que define la jurisdicción es el tipo de vinculación que materialmente desempeñaba el servidor, es claro que dicha condición solo puede determinarse con certeza en la sentencia^[68]. En contraste, la solución adoptada por la Corte Constitucional implica que la jurisdicción no se cuestionará permanentemente dentro del trámite, pues ella se define por la existencia de un contrato de prestación de servicios estatal inicial, respecto del cual se denuncia su posible desnaturalización, lo que ubica este asunto dentro de la competencia de la jurisdicción contenciosa (...)" (Negritas originales)

Este criterio fue reiterado recientemente en el auto 054 de 2023.

JUEZ COMPETENTE PARA RESOLVER PRETENSIONES DE VINCULACIÓN LABORAL POR CONTRATO REALIDAD CON UNA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO CUANDO SE SOLICITE LA DECLARATORIA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL ILEGAL

Siendo consciente esta funcionaria que en este proceso principalmente se solicita la declaratoria de contrato realidad con el MUNICIPIO DE MEDELLÍN -hoy DISTRITO- no por el encubrimiento de esta relación mediante contratos de prestación de servicios, sino por intermediación laboral ilegal con la FUNDACIÓN PASCUAL BRAVO, entidad del sector privado, es menester indicar que la H. Corte Constitucional también se ha pronunciado, en sede de definición de conflictos de jurisdicción. En los autos 1151 de 2021 y 252 de 2022, aclaró que

05001310501320220029200

en los eventos en los que se **solicita la declaratoria de vinculación laboral con entidades estatales por abuso de la tercerización y/o intermediación laboral, cuando una entidad pública es la usuaria o beneficiaria del servicio prestado por el demandante, es necesario acudir a las reglas generales de competencia, es decir, en caso que las labores desempeñadas por el demandante correspondan a las propias de un trabajador oficial será el Juez Laboral quien deba conocer, o cuando correspondan a las propias del empleado público será el Juez Administrativo quien deba conocer.**

Dijo así la H. Corte Constitucional en el Auto 1151 de 2021:

"(...) 18. En principio es claro que el legislador ha asignado a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social el conocimiento de todos aquellos conflictos jurídicos que se derivan, directa o indirectamente, de los contratos de trabajo -como lo sería el suscrito entre una persona trabajadora y una empresa temporal-. Mientras que ha atribuido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento específico de los conflictos enmarcados en la relación legal y reglamentaria de los empleados públicos con el Estado.

19. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando una entidad pública es la usuaria o beneficiaria del servicio contratado por la empresa temporal -a través de un contrato de trabajo-, dentro del proceso, a partir de las pretensiones de la demanda, puede determinarse que el vínculo con la persona privada se ha desnaturalizado y que, en el fondo, se está encubriendo una relación laboral con el Estado, que pone en riesgo la protección de los derechos laborales -salariales y prestacionales- de estos servidores. En estos casos en los que puede estar de por medio la desnaturalización del vínculo -y, como consecuencia de ello, el pago de derechos laborales-, el conocimiento del asunto se funda en las reglas generales de competencia, esto es, si lo que puede estar detrás es la evasión de un vínculo contractual, la competencia será de la jurisdicción ordinaria, mientras que, si el ocultamiento de la relación involucra el haberse omitido la formalización de una relación legal y reglamentaria, será de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

20. En un escenario como estos, en los que, por supuesto, no se tiene competencia para decidir asuntos que, precisamente, son objeto de estudio y debate al interior del proceso, esta Corporación ha sostenido que "en principio, al juez encargado de dirimir el conflicto de jurisdicción no le corresponde hacer un análisis minucioso y exhaustivo de las funciones de quien pretende el reconocimiento de una relación laboral con el Estado o de otros aspectos que correspondan al fondo de la controversia que deberá ser resuelta por el juez natural. No obstante, para efectos de dirimir el conflicto, cuando no hay elementos suficientes que determinen con claridad la naturaleza del vínculo que podría tener el trabajador -como ocurre en algunos casos en los que se pretende que se declare la existencia de un contrato realidad con el Estado-, debe acudirse a la regla general de vinculación de la entidad correspondiente para vislumbrar razonablemente sobre cuál jurisdicción recae la competencia del asunto."

21. Por lo anterior, La Sala Plena considera que los jueces administrativos son competentes para conocer las demandas contra las empresas de servicios temporales en donde la empresa usuaria es una entidad pública, siempre que se discuta directamente la existencia de la relación entre el trabajador y la entidad usaria y/o se pretenda el reconocimiento de derechos derivados del vínculo contractual con cargo a la entidad pública. Para la consolidación de este curso de acción, además, se requiere que la regla general de vinculación de la entidad pública usuaria -de quien se reclaman derechos laborales- sea la de empleado público y prima facie no sea posible desvirtuar la misma (...)"

En este caso, es claro que se configuran las subreglas definidas por la H. Corte Constitucional en los Autos 1151 de 2021 y 252 de 2022, pues el señor CAMILO ANDRÉS RENDÓN ÁLVAREZ, aun cuando fue contratado por la FUNDACIÓN PASCUAL BRAVO manifiesta haber prestado sus servicios personales directamente para el MUNICIPIO DE MEDELLÍN -HOY DISTRITO- a quien cataloga de empleador, realizando actividades de técnico, descritas en la cláusula tercera del contrato de trabajo visible en la página 14 del PDF 002, con ocasión del contrato de prestación de servicios N° 4600080517 de 2019 suscrito entre la FUNDACIÓN PASCUAL BRAVO y la SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, las cuales son completamente ajenas a actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas.

Se recuerda que en relación con la vinculación de personal a las entidades territoriales como Municipios y Distritos, el artículo 4 del Decreto 2127 de 1954 reza:

"No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las relaciones entre los empleados públicos y la Administración Nacional, Departamental o Municipal no constituyen contratos de trabajo, y se rigen por leyes especiales, a menos que se trate de la construcción o sostenimiento de las obras públicas, o de empresas industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten con fines de lucro, o de instituciones idénticas a las de los particulares o susceptibles de ser fundadas y manejadas por estos en la misma forma".

Contexto en el cual, conforme las normas generales de competencia, en el estado preliminar del asunto se puede considerar que las labores del demandante fueron propias de un empleado público, contexto en el cual la jurisdicción y competencia se encuentra asignada a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se declarará la falta de jurisdicción y se ordenará el envío del expediente a la Oficina Judicial para ser repartido entre los JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.

Por lo expuesto, el **JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la FALTA DE JURISDICCIÓN, para conocer de la presente demanda, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: ESTIMAR la competencia para conocer de esta controversia en los JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.

TERCERO: REMITIR el proceso a la oficina de apoyo judicial, para que, se haga su reparto ante los JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO DE MEDELLIN.

Por Secretaría del Despacho, líbrese el oficio correspondiente.

NOTIFÍQUESE

LAURA FREIDEL BETANCOURT
JUEZ


Emails: cacamuva@gmail.com; aposadaareiza@yahoo.es; rossydiaz32@hotmail.com; notificaciones@gha.com.co;

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO 13 LABORAL DEL CIRCUITO

HACE CONSTAR

Que conforme a la Ley 2213 de 2022, el presente auto se notificó por estados el día 08/03/2023, consultable aquí:

[PUBLICACIÓN DE ESTADOS AÑO 2023 -JUZGADO 13 LABORAL CIRCUITO DE MEDELLÍN](#)



ÁNGELA MARÍA GALLO DUQUE
Secretaria

Firmado Por:
Laura Freidel Betancourt
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Laboral 013
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ef8c89f38f2169515f7b2682a697016f77dffb15ca793891752a19d2238daf5**

Documento generado en 07/03/2023 08:30:59 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>